

Jueves
16 de octubre del 2008



Transiciones

VÍCTOR ALEJANDRO ESPINOZA

Correo electrónico: victorae@dns.colef.mx

Del dicho al hecho

La definición sencilla de “Buen Gobierno” establece que es aquél que hace lo que la gente quiere que haga. Esta forma de ver el accionar de una administración pública exige ciudadanos atentos y participativos y gobernantes sensibles a la opinión pública. Efectivamente la democracia implica no sólo elecciones regulares, también una clara rendición de cuentas y, lo que ahora nos ocupa, corresponsabilidad, es decir, cumplir los compromisos establecidos durante las campañas. Se dice rápido, pero resulta sumamente complejo dar cumplimiento a esta dimensión democrática.

La mejor forma de gobierno que el hombre se ha dado es la democracia. Parte consustancial son los partidos políticos. El objetivo de los mismos es la obtención y conservación del poder político. Es su naturaleza, por más que los escuchemos decir que buscan otros fines superiores. Hacen casi cualquier cosa por acceder al poder. Bajo un sistema democrático lo obtienen por medios electorales y no lo quieren perder. Para ganar las elecciones, los partidos y sus candidatos prometen a los electores cualquier cosa, o más bien, muchas cosas. Gran parte de ellas difíciles o imposibles de cumplir. Pero cuando la democracia no se ha consolidado, una vez en el gobierno, desaparece la rendición de cuentas. Se olvidan de sus promesas de campaña y no hay consecuencias por el incumplimiento. Claro que bajo democracias de calidad, existen mecanismos de sanción a los gobernantes; uno de ellos es la revocación de mandato. En México no existen este tipo de figuras que incluirían además el referéndum y el plebiscito.

Lo que tenemos son gobernantes para los cuales las sanciones por la falta de corresponsabilidad no existen. Puede la sociedad desgañitarse solicitando la remoción de funcionarios y los gobernantes “no los ven ni los oyen”. La única posibilidad de los ciudadanos para reparar su error al escoger a sus gobernantes es sancionando a los partidos en la siguiente elección; el problema es que suele ser un mecanismo que puede ver-

se como muy lejano en el tiempo. Por ello, los gobernantes deberían saber escuchar a la sociedad. Eso debería estar en su interés pues garantizaría la continuidad partidaria; desgraciadamente, muchos gobernantes piensan que sus cargos son eternos y que no tienen porque hacer caso a lo que la gente “desinformada” quiere.

La gran paradoja es que los partidos políticos para acceder y conservar el poder viven presas de la demagogia. Sus candidatos se nos presentan como los grandes salvadores de la patria. Son capaces de “defender el peso como un perro”; o de afirmar que “ya nos saquearon pero no lo volverán a hacer”; o de “solucionar el problema de Chiapas en 15 minutos”; o de que con las crisis mundial “solo nos dará un catarro”; o de que “habrá pleno empleo”; o de que “vamos ganando la batalla al crimen organizado”; o de que hay “petróleo en aguas profundas”; o de que “no tenemos dinero para construir nuevas refinerías”, pero ya descubrimos que siempre si hay “para construir una”; o de que “bajarán los salarios de la alta burocracia en 5%”, pero “el próximo año nos subiremos el 10%”.

La demagogia aleja a los ciudadanos de las urnas. Para el ciudadano de “a pie”, “todos los gobernantes son iguales; por ello no vale la pena participar en la vida pública”. Desgraciadamente este juicio se extiende ante los malos resultados gubernamentales. “No vale la pena participar porque nadie nos hace caso”. El alejamiento entre gobierno y ciudadanía crece y pone en peligro la vida democrática. Los candidatos y sus partidos deberían esgrimir proyectos gubernamentales antes que promesas salvadoras. En esos proyectos deberían destacar, primero, los diagnósticos adecuados. No solo decir que van a resolver los problemas más acuciantes, sino cómo lo piensan hacer. No queremos escuchar que estamos en guerra, sino saber cómo la vamos a ganar.